

RV: C31498 RV: RADICADO: 76001-33-33-001-2021-00057-00

Jair Zapata Angulo <jzapataan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 27/05/2021 6:41 AM

Para: Juzgado 01 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: juan.villamizar@aerocivil.gov.co <juan.villamizar@aerocivil.gov.co>; Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>

5 archivos adjuntos (2 MB)

CONTESTACION DEMANDA RAMIRO A. ROMERO P..pdf; PODER RAMIRO ROMERO JUAN VILLAMIZAR 25MAY2021.pdf; C-1125-04.rtf; CEDULA Y TP.pdf; CERTIFICACION Y RESOLUCION.pdf;

UniSoftware Ltda. - Registro de Actuaciones

Proceso Ver Opciones Ayuda

No. Proceso: 76001 - 33 - 33 - 001 - 2021 - 00057 - 00 **Buscar Proceso**

> CALI (VALLE) > Juzgado Administrativo > Administrativo Oralidad

Información Principal Sujetos Secretaría Despacho Final

Demandante: RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZON

Demandado: COLPENSIONES

Area: 0001 > Administrativo

Tipo de Proceso: 0001 > Ordinario

Clase de Proceso: 0002 > ACCION DE NULIDAD Y

Subclase: 0010 > Laboral

Tipo de Recurso: 0000 > Sin Tipo de Proceso

Despacho: 01 JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL

Asunto a tratar: R.9512-LLEGA X E MAIL 23/03/2021-H

Actuación Desarrollo

Actuación a Registrar: 27/05/2021

Correspondencia Of Apoyo

Fecha Actuación: 27/05/2021 (dd/mm/aaaa)

Registro en: Folios: Cuadernos:

Término: ☒ Sin Término ☐ Término Legal ☐ Término Judicial

Calendario: ☐ Ordinario ☐ Judicial

☐ Tiene Término

Días: 0

Inicial: / / (dd/mm/aaaa) Final: / / (dd/mm/aaaa)

Anotación: C31498: allega contestacion de la demanda poder y anexos: miércoles, 26 de mayo de 2021 17:55 5 archivos: juan manuel villamizar-jz

Ubicación: 0046 > Correspondencia OF AM **Aceptar** **Cerrar**

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali

Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 9:17 p. m.

Para: Jair Zapata Angulo <jzapataan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: C31498 RV: RADICADO: 76001-33-33-001-2021-00057-00

DHORA STELLA RAMÍREZ

Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

cid:image001.png@01D38AB8.5F7EFE10

De: Juan Manuel Villamizar Ortega <juan.villamizar@aerocivil.gov.co>

Enviado: miércoles, 26 de mayo de 2021 17:55

Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: asesoriajuridica.romero <asesoriajuridica.romero@gmail.com>

Asunto: RADICADO: 76001-33-33-001-2021-00057-00

Señores Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali.

Con un cordial saludo, estando dentro del término, agradezco hacer llegar contestación de demanda y anexos al **Juzgado Primero Administrativo de Cali**.

DEMANDANTE: RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZÓN.

DEMANDADAS: COLPENSIONES Y AERONAUTICA CIVIL.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL.

RADICADO: 76001-33-33-001-2021-00057-00

CONSTESTACION DEMANDA.

Se adjuntan documentos.

Atte.

JUAN MANUEL VILLAMIZAR ORTEGA

CC 19493832

TP 69103 CSJ

Cell 3123006001



Señor

JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI (V)

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZÓN
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
 COLPENSIONES y AERONAUTICA CIVIL
RADICADO: 760013333001202100057
ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

JUAN MANUEL VILLAMIZAR ORTEGA, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, abogado en ejercicio e identificado con CC 19.493.832 y TP No 69.103 del CSJ, en mi calidad de apoderado de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL** con Nit. 899999059-3, representada legalmente por el doctor **JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ** y como Director Regional del Valle el ingeniero **MILTON CESAR SANCHEZ P**, en mi condición de apoderado judicial de esta entidad del Estado, con poder debidamente conferido, procedo a contestar la demanda del radicado, como lo dispone el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali, mediante Auto Interlocutorio No.178 del 04 de mayo de 2021. Dicho lo anterior, dentro del término de traslado me pronuncio en los siguientes términos:

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

AL PRIMERO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL SEGUNDO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL TERCERO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL CUARTO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL QUINTO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL SEXTO: Parcialmente cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados al expediente, pero aclarando que la afirmación de la apoderada, al decir que la profesión de bombero de la Aeronáutica Civil se clasifica como actividad de alto riesgo, en la parte de argumento de la defensa y de razones de derecho y jurisprudencia, daré la precisión sobre este concepto de alto riesgo.

AL SÉPTIMO y repetido: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL OCTAVO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL NOVENO: Es cierto, así se puede evidenciar. No obstante, en el contenido de las resoluciones acusadas, Colpensiones le negó la pensión solicitada como de alto riesgo.



AL DÉCIMO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL DÉCIMO PRIMERO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL DÉCIMO SEGUNDO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL DÉCIMO TERCERO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL DÉCIMO CUARTO: No se evidencia de los documentos anexos y enviados en el traslado de la demanda.

AL DÉCIMO QUINTO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

AL DÉCIMO SEXTO: Es cierto, así se puede evidenciar de los documentos aportados.

FRENTE A LA SOLICITUD DE DECLARACIONES Y CONDENAS

La parte demandante pretende que se declare la **NULIDAD** de la Resoluciones No SUB 4067 del 08 de marzo de 2017 que niega la pensión de vejez especial, la No SUB 66832 del 16 de mayo de 2017 que resuelve recurso de reposición confirmando y la No DIR 6449 del 24 de mayo de 2017 que resuelve recurso de apelación también confirmando. Todas proferidas por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Al respecto me opongo a las pretensiones de la parte actora en su totalidad, de acuerdo a los argumentos de la defensa, en razón que lo pretendido en este caso, es la nulidad de las resoluciones arriba indicadas, donde se negó al señor **RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZÓN**, el reconocimiento de la **PENSION ESPECIAL DE VEJEZ POR ALTO RIESGO** por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, en su condición de bombero de la Aeronáutica Civil.

Además de lo anterior me opongo a las pretensiones:

En razón que resulta necesario precisar que los Bomberos Aeronáuticos, no son considerados como **un cuerpo de bomberos como tal**, solo a partir de la expedición de la Ley 1575 de 2012, hacen parte de las instituciones que integran los Bomberos de Colombia. Frente al mismo punto, de conformidad con la certificación mencionada, es un hecho que el demandante presta actualmente sus servicios a la Aeronáutica Civil, cumpliendo las funciones y regulaciones aeronáuticas vigentes, entre las cuales está la función de extinción de incendios.

En lo relativo al pago de la cotización adicional por actividad de **alto riesgo** en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003 y la expedición de la Ley 1575 de 2012, toda vez que ya no existía la obligación de realizar el aporte por actividad de **alto riesgo**, a los bomberos aeronáuticos.

Para la Aeronáutica Civil no es procedente pronunciarse sobre pensiones y régimen de prima media, toda vez que la Aeronáutica Civil no es la entidad competente para ello.



ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

En lo relativo a las pretensiones que atañen exclusivamente a la Entidad que represento, esto es a la Aeronáutica Civil, paso a continuación a esbozar a la luz de la jurisprudencia aplicable, cual es el concepto y alcance de alto riesgo aplicable a los bomberos aeronáuticos, de acuerdo a la normatividad vigente.

De conformidad a lo ya contestado frente a los hechos y a las declaraciones, condenas, paso a argumentar las razones de derecho que desvirtúan en su totalidad estas declaraciones basado en la **Sentencia C-1125/04** de la Corte Constitucional.

ALTO RIESGO Y RIESGO PROFESIONAL

Es importante llamar la atención que en la demanda, parece confundir el alto riesgo y por contera el beneficio especial que se concede por el hecho de que una determinada actividad sea considerada como de alto riesgo, con el riesgo profesional, desconociendo que este último, como bien lo afirma el Ministerio de la Protección Social, se refiere a la protección que se efectúa por los efectos que se pueden ocasionar por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se trata de un riesgo derivado de la actividad que se desarrolla y para ello el Sistema General de Riesgos Profesionales tiene previsto una cotización diferencial según el mayor o menor riesgo de la actividad. El concepto de alto riesgo, por su parte, está atado a que la labor desarrollada por el trabajador por las especiales circunstancias que la rodean, hacen que se vea disminuida su expectativa de vida saludable, razón por la cual se hace necesario protegerlo mediante la posibilidad de obtener una pensión especial de vejez con el cumplimiento de requisitos menores.

En dicha Sentencia podemos resaltar varias intervenciones que precisan el real significado de lo que constituye el concepto de **Alto Riesgo**:

"1. En nombre y representación del Ministerio de la Protección Social presentó escrito Gloria Cecilia Valbuena Torres, a través del cual sustenta las razones por las cuales el numeral 5 objeto de demanda se ajusta a los preceptos superiores.

En primer término, asegura que dado que la seguridad social es un derecho de amplia creación legal, el legislador es el llamado a establecer las condiciones y requisitos para que las personas puedan acceder al beneficio pensional sin más limitaciones que la propia Constitución. No obstante, la Ley 797 de 2003 facultó al Presidente de la República para expedir o modificar el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y definir las condiciones, requisitos y beneficios aplicables a dichos trabajadores.

Sostiene que las actividades de alto riesgo para el Sistema General de Pensiones son aquellas que por su propia naturaleza generan una disminución en la expectativa de vida saludable del trabajador, independientemente de las condiciones en las cuales se efectúe el trabajo, y el beneficio que se les otorga es acceder a la pensión a edades inferiores a las establecidas para la generalidad de trabajadores debido a la reducción de vida saludable a la que se ven expuestos y a la mayor cotización pagada por los empleadores.



En estos casos, aduce que sólo procede declarar la inconstitucionalidad cuando ella sea manifiesta, cuestión que no ocurre con la norma objeto de reproche. Al respecto, afirma que el actor confunde el riesgo profesional con la disminución de la expectativa de vida que es el verdadero riesgo amparado por las pensiones especiales de vejez. Agrega que no es la labor de los cuerpos de bomberos en general la que cuenta con la protección especial otorgada por el legislador, sino aquella específica de extinguir incendios.

Aduce que la labor desarrollada por los bomberos de la Aeronáutica Civil no es idéntica a la desempeñada por quienes pertenecen a los cuerpos de bomberos toda vez que los primeros se dedican en mayor medida a la prevención de eventos que al enfrentamiento de sus efectos, pues cualquier contingencia que se presente en una terminal aérea tiene la virtualidad de convertirse en catastrófica, y debido a la efectividad de su labor no se ven expuestos a los nocivos efectos que, en largo plazo, genera la exposición al calor y al humo, lo cual precisamente es el propósito de las pensiones especiales de vejez de alto riesgo. Además, agrega que no existe un número significativo de incendios en dichos lugares, al punto que por año aproximadamente se presentan en promedio dos relacionados con incidentes aéreos y cuatro con incidentes forestales. De otro lado, quienes laboran en los cuerpos de bomberos se ven enfrentados permanentemente a la extinción de incendios y soportan los efectos que en el largo plazo implica la exposición constante al calor y al humo.

2. En representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Diana Arenas Pedraza presentó escrito dirigido a defender la constitucionalidad de la norma acusada.

En su concepto, para determinar las actividades de alto riesgo se hizo un estudio analizando cuáles ameritaban acceder a un sistema pensional más favorable teniendo en cuenta que la labor desempeñada disminuyera las expectativas de vida, debido a que el objetivo de esa pensión es proteger al trabajador que se vea expuesto a un riesgo disminuyendo el tiempo de exposición a condiciones lesivas para su salud mediante su retiro anticipado. En ese contexto, expresa que la pensión especial de vejez se otorga no por el hecho de que la actividad desarrollada por la persona sea riesgosa en sí misma, sino en razón a que por el ejercicio permanente de ella la persona se ve expuesta a condiciones que lesionen su salud y que por ello se le disminuyan sus expectativas de vida saludable.

Por tal razón, afirma que no se pueden comparar los bomberos aeronáuticos con los del Cuerpo de Bomberos, en cuanto los primeros no se ven expuestos de manera permanente a actuar en operaciones de extinción de incendios, independientemente que sea una labor que los pone en riesgo de sufrir un accidente profesional, y los segundos sí están expuestos por tiempo prolongado y de manera permanente a esa actividad. Así, como los primeros deben atender esa labor de manera esporádica la exposición que sufren al riesgo también es ocasional y no alcanza a generar patologías de carácter crónico o disminución de su expectativa de vida. (Resaltado fuera de texto)

Agrega que el actor confunde el concepto de riesgo profesional, frente al cual los bomberos aeronáuticos sí están protegidos, con el alto riesgo, al que no se ven enfrentados debido a lo esporádico de su actividad de atender incendios.



De otra parte, frente a la comparación que pretende hacer el demandante con los controladores aéreos, aduce que éstos, a diferencia de los bomberos aeronáuticos, están permanentemente comprometidos con condiciones de trabajo que producen fatiga mental y física debido a los altos niveles de concentración y atención que su actividad requiere. Por tal motivo aunque unos y otros trabajen en una misma organización, sus actividades tienen condiciones y frecuencias distintas.

3. En representación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil presentó escrito Ricardo Álvarez Ospina.

*Luego de relatar la razón para la creación del servicio de bomberos aeronáuticos y de señalar que **éstos no tienen el carácter de Cuerpo de Bomberos**, así como la diferencia de regulación legal entre unos y otros, manifiesta que la norma acusada está en perfecta armonía con la Carta Política, razón por la cual solicita que se declare su constitucionalidad."*

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil UAEAC, en su momento optó por cancelar la cotización adicional consagrada en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 a los funcionarios que realizaban actividades de bomberos aeronáuticos, por lo que el lapso comprendido entre agosto de 1994 y agosto de 2003, se encuentra cubierto por la cotización que se realizaba en su momento, no siendo viable realizar un nuevo pago por las mismas circunstancias a los mismos funcionarios. Sobre los aportes por alto riesgo desde la expedición del Decreto 2090 de 2003, es necesario recordar que esta normatividad fue proferida en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional mediante el artículo 17 de la Ley 797 de 2003, con el fin de regular y unificar los regímenes especiales de alto riesgo en Colombia; **allí se definieron las condiciones para la pensión de vejez de alto riesgo** y se precisa el listado de estas actividades en el país. Por ello, en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil las cotizaciones para los bomberos aeronáuticos fueron suspendidas a partir del 30 de septiembre de 2003, teniendo en cuenta que en dicho decreto se consagraron como pertenecientes a esa categoría al interior de la entidad, exclusivamente las labores desempeñadas por el técnico aeronáutico con funciones de controlador de tránsito aéreo. (Resaltado y subrayado fuera de texto)

Es así como se señalan en el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 como actividades de alto riesgo para el trabajador las siguientes:

*"(...) ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: 1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. 2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. 4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. 5. **En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.** 6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función*



específica de actuar en operaciones de extinción de incendios. (...). (Resaltado fuera de texto)

*En este contexto, se inicia una discusión sobre la actividad de alto riesgo desempeñada por los servidores públicos miembros del servicio de salvamento y extinción de incendios en la Aeronáutica Civil (bomberos aeronáuticos), siendo el principal argumento de la controversia suscitada la posible vulneración del derecho a la igualdad de los bomberos aeronáuticos frente a los trabajadores que desarrollaban actividades como miembros del servicio de salvamento y extinción de incendios en los **demás organismos descritos en la ley como cuerpos de bomberos**, o incluso frente a servidores de la misma aeronáutica que se desempeñan como técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, quienes sí habían sido considerados en dicha categoría bajo el Decreto 2090 de 2003 como actividad de alto riesgo para la salud del trabajador. Como eje central de esta discusión en estudio de constitucionalidad de dicha norma, la Corte Constitucional en sentencia C-1125 de 2004, sustentando la exequibilidad únicamente del artículo 2 numeral 5 del Decreto 2090 de 2003, la cual fue demandada por la posible interpretación contraria a la constitución devenida de la presunta omisión por parte del legislador al no incluir expresamente a los bomberos aeronáuticos dentro de las actividades de alto riesgo desempeñadas en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, previa discriminación de las funciones desempeñadas tanto por los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo como por los bomberos aeronáuticos, se pronunció respecto de la presunta violación al aludido principio en los siguientes términos: "4.3. Ahora bien, el legislador está vinculado íntimamente al principio de igualdad, de manera que debe dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no exista una razón suficiente que permita dispensarle un tratamiento desigual (mandato de tratamiento igual) y, además, está obligado a otorgar un trato desigual o a establecer diferenciaciones o a dar un trato distinto a supuestos de hecho diferentes (mandato de tratamiento desigual). Así mismo, le está permitido que trate de manera idéntica supuestos de hecho diferentes cuando ello resulte razonable y siempre que no exista una razón suficiente que imponga dicha diferenciación. (Resaltado fuera de texto)*

*De esa manera se incurre en una discriminación normativa cuando dos condiciones fácticas semejantes son tratadas por el legislador de manera desigual sin que exista una justificación objetiva y razonable. Por contera, si el legislador ha reconocido un determinado beneficio a un grupo de personas determinado y ha excluido del mismo a otros que, por compartir los mismos supuestos fácticos, deberían ser sujetos de igual tratamiento, se incurre entonces en violación del principio de igualdad y debería la Corte proferir una sentencia integradora para garantizar la igualdad. 4.4. De acuerdo con la descripción de funciones hecha, la Corte encuentra que si bien tanto quienes cumplen funciones de controladores de tránsito aéreo, como los que se desempeñan en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la Aeronáutica Civil pertenecen a una misma entidad, lo cierto **es que no están en el mismo plano de igualdad**, pues unos y otros desempeñan labores diversas que, por lo menos desde esa óptica, no son susceptibles de comparación. (...)*. (Negrillas fuera de texto).

Lo anterior significa que la Corte Constitucional consideró, que al excluirse a los miembros del servicio de salvamento y extinción de incendios de la Aeronáutica Civil **de las**



actividades de alto riesgo, el legislador no incurrió en una omisión relativa que desconoce el principio de igualdad, pues concluye que bomberos aeronáuticos y controladores desempeñan labores disímiles, no susceptibles de juicio de comparación.

Profundizando aún más en el análisis efectuado por el máximo órgano constitucional, el cual a su vez se fundamentó principalmente en un estudio técnico de las funciones desempeñadas por ambos grupos (bomberos aeronáuticos y técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo), debe destacarse que en sus consideraciones también se hizo alusión a la diferencia de los bomberos con un tercer grupo señalado en el numeral 6 del artículo en comento (artículo 2 del Decreto 2090 de 2003), compuesto por las personas que cumplieran actividades relacionadas con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios al interior de los “cuerpos de bomberos”. Del estudio de constitucionalidad se evidencia que el criterio funcional también fue tenido en cuenta por el legislador para determinar las actividades consideradas como de alto riesgo, y que atiende en todo caso tanto a la ocupación misma, como al tiempo de exposición a los efectos nocivos que la actividad puede generar. De esta forma, la Corte interpreta que no se encontraban incluidos los bomberos pertenecientes a la Aeronáutica Civil dentro de las actividades de alto riesgo señaladas taxativamente en el Decreto 2090 de 2003, pues llega incluso a puntualizar sobre la frecuencia con que este trabajador desempeña la actividad de “alto riesgo”, cuestiones que son a su vez las que por sí mismas perjudican o desmejoran su expectativa de vida, y que no encontró presentes en las funciones desempeñadas por los bomberos aeronáuticos. Así las cosas, se dejó resuelta la discusión sobre si estos últimos debían ser considerados como trabajadores en actividades de alto riesgo, concluyéndose que no por el hecho de pertenecer a la misma entidad se encontraban en plano de igualdad frente a los que sí fueron considerados con protección especial por el legislador en dicha oportunidad, es decir, los técnicos aeronáuticos con funciones de controlador de tránsito aéreo. Nutriendo aún más los anteriores argumentos, de nuevo recalca la Corte que no fue solo la ocupación el aspecto considerado por el legislador para determinar si una actividad es catalogada como de alto riesgo, sino también la frecuencia con que se expone el trabajador a los efectos nocivos que su actividad laboral puede generar, motivo por el cual, no se encontraban incluidos en los señalados “cuerpos de bomberos”, los empleados públicos bomberos pertenecientes a la Aeronáutica Civil. En el fallo también se dejó sentada la diferenciación existente entre las actividades consideradas como de alto riesgo, y la protección especial por riesgo profesional, entendiéndose como de alto riesgo la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, y actividad con protección especial por riesgo profesional la desplegada por los bomberos aeronáuticos, en los siguientes términos: “(...) *Es importante llamar la atención que el actor parece confundir el alto riesgo y por contera el beneficio especial que se concede por el hecho de que una determinada actividad sea considerada como de alto riesgo, con el riesgo profesional, desconociendo que este último, como bien lo afirma el Ministerio de la Protección Social, se refiere a la protección que se efectúa por los efectos que se pueden ocasionar por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se trata de un riesgo derivado de la actividad que se desarrolla y para ello el Sistema General de Riesgos Profesionales tiene previsto una cotización diferencial según el mayor o menor riesgo de la actividad. El concepto de alto riesgo, por su parte, está atado a que la labor desarrollada por el trabajador por las especiales circunstancias que la rodean*



hacen que se vea disminuida su expectativa de vida saludable, razón por la cual se hace necesario protegerlo mediante la posibilidad de obtener una pensión de vejez con requisitos menores. (...) (Resaltado fuera de texto)

Queda claro hasta este punto, que la Corte halló que las condiciones adversas a las que se ven enfrentados en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil **los bomberos aeronáuticos** y los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo son distintas, no solo debido a sus funciones que son disímiles, sino por la tensión permanente a la que se ven expuestos estos últimos, a diferencia de los anteriores. Finalmente, refiriéndose a la trayectoria de la protección especial de los trabajadores de alto riesgo de la Aeronáutica Civil, la Corte va aún más allá señalando en las consideraciones del fallo en comento lo siguiente:

“(...) Es más, ha de tenerse en cuenta que ni en el Decreto 1281 de 1994 ni en el Decreto 1835 del mismo año se consideró como actividad de alto riesgo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil la desarrollada por las personas que prestan sus servicios de salvamento y extinción de incendios. Por manera que no es posible afirmar que las condiciones pensionales han sido desmejoradas. (...)”

Según lo expuesto hasta el momento, dentro de las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador que se encuentran señaladas en el Decreto 2090 de 2003, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 por remisión expresa de su artículo 8 y de lo dispuesto en el Decreto 2655 de 2014, **no están las desplegadas por los bomberos pertenecientes a la Aeronáutica Civil**. Solo una vez promulgada la Ley 1575 de 2012 se generó el sustento legal para poder reconocer y pagar esta obligación para el beneficio de los bomberos aeronáuticos teniendo en cuenta los artículos que a continuación se transcriben: “Artículo 4º. A partir de la vigencia de la presente ley la organización para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominarán Bomberos de Colombia. Los bomberos de Colombia forman parte integral del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o quien haga sus veces. Las instituciones que integran los bomberos de Colombia son las siguientes: (...) c) Los Bomberos Aeronáuticos. (...)” “Artículo 18. Clases. Los Cuerpos de Bomberos son Oficiales, Voluntarios y Aeronáuticos, así: (...) c) Los Bomberos Aeronáuticos: son aquellos cuerpos de bomberos especializados y a cargo de los explotadores públicos y privados de aeropuertos, vigilados por la Autoridad Aeronáutica Colombiana y organizados para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas propias del sector aeronáutico.” “Artículo 27. Seguridad social y seguro de vida. La actividad de bomberos será considerada como una labor de alto riesgo para todos los efectos, y los miembros de los cuerpos de bomberos gozarán de los derechos de seguridad social. Quienes laboren como bomberos tendrán la cobertura de un seguro de vida durante el tiempo que ejerzan dicha labor.” (Resaltado fuera de texto)

En este sentido, la U.A.E. de Aeronáutica Civil vino cancelando los aportes adicionales por actividad de alto riesgo de conformidad con sus obligaciones legales vigentes como



empleador del señor **RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZÓN** en la vigencia del Decreto 1835 de 1994 y hasta la expedición del Decreto 2090 de 2003.

En conclusión:

Dados los argumentos citados, el cargo de bombero aeronáutico no hace parte de los denominados **“Cuerpos de Bomberos”** de conformidad con el Decreto 2090 de 2003 expedido en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 que derogó el Decreto 1835 de 1994, reglamentando las actividades de **alto riesgo** de los servidores públicos y precisó que en los **“Cuerpos de Bomberos”** la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.

Dicha norma dispuso: En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida por dicha entidad. Estos técnicos son los considerados como de Alto Riesgo y los **“Cuerpos de Bomberos”** y como a se explicó, **los bomberos aeronáuticos no conforman estos cuerpos.**

Por las razones expuestas, me opongo a cada una de las pretensiones del demandante, por consiguiente solicito se nieguen las pretensiones de la demanda en su totalidad.

Hasta aquí los argumentos propios de la Entidad que represento.

Ahora bien, en lo referente a las demás pretensiones como son el número de las semanas cotizadas y si se reúnen los requisitos para obtener la pensión de vejez especial por alto riesgo, por ser COLPENSIONES quien las negó en las resoluciones acusadas, dejo a dicha entidad lo pertinente en la contestación y pruebas que le corresponde. En igual forma, la Aeronáutica Civil no es competente en el reconocimiento y liquidación de pensiones, por ello, no tiene injerencia en las pretensiones del actor en lo propio de Colpensiones.

CAPITULO DE EXCEPCIONES

EXCEPCIONES DE FONDO

LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los Actos Administrativos atacados gozan de plena legalidad, por ser proferidos por una entidad competente, respetando el orden jurídico contenido en las normas en que se fundaron y los motivos que le sirvieron de causa en su expedición.

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION Y COBRO DE LO NO DEBIDO. Al cumplir a cabalidad, con el pago que ordena la ley al demandante, los cuales se han hecho en debida forma a Colpensiones; aportes por Alto Riesgo para los funcionarios que cumplían funciones de Bombero Aeronáutico desde el 31 de agosto de 1994 y hasta el 31 de agosto de 2003, en razón a la suspensión del aporte en cumplimiento del Decreto 2090 de Julio 26 de 2003.



Se reitera que la suspensión de los aportes a Alto Riesgo desde Septiembre 30 de 2003, atendiendo el criterio orgánico, exclusivamente a las labores desempeñadas por el Técnico Aeronáutico con funciones de Controlador de Tránsito Aéreo.

En consecuencia, el Decreto 2090 de 2003 constituye el fundamento legal de la Aeronautica Civil para no haberla efectuado, toda vez que los Bomberos Aeronáuticos estaban excluidos **por no conformar cuerpos de bomberos.**

Esta norma fue objeto de discusión en estudio constitucional (Decreto 2090 de 2003 artículo 2 numeral 5 y 6), en sentencia C-1125 de 2004 declarando la exequibilidad del art. 2 numeral 5 del Decreto 2090 de 2003, donde se concluye que el legislador no incurrió en omisión, ni desconoció el principio de igualdad, concluyendo que los Bomberos y Controladores desempeñan labores disimiles, y no susceptibles de juicio de comparación. Que una cosa es el alto riesgo, y otra el riesgo profesional que ni el Decreto 1281 de 1994, y ni el Decreto 1835 del mismo año, considero a los Bomberos Aeronáuticos como actividades del alto riesgo, menos aún que haga o vea disminuida por sus funciones su expectativa de vida saludable.

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona (natural o jurídica), como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda. Así las cosas, la falta de competencia de la Aeronautica Civil en el reconocimiento y liquidación de pensiones, por ello, no tiene injerencia en las pretensiones del actor en lo propio de Colpensiones.

PRUEBAS

En cuanto a las pruebas me atengo al valor probatorio de las aportadas por Colpensiones, el demandante y las presentadas en mi calidad de apoderado de esta entidad del Estado y aquellas que su despacho considere de conformidad a las normas aplicables.

Copia de la Sentencia C-1125/04 de la Corte Constitucional.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**, en la Avenida el Dorado No. 103 – 15, Piso 4º, Oficina Asesora Jurídica / Grupo de Representación Judicial - Bogotá D.C. teléfono 296 3745 o, a la Dirección de Notificaciones Judiciales de Aerocivil: Notificaciones_Judiciales@aerocivil.gov.co

El suscrito recibe notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en el Grupo de Representación Judicial, ubicado en la Avenida El Dorado No. 103 - 15 de la Ciudad de



Bogotá D.C., Piso 4°. Tels. 296 3745. Celular: 3123006001 o a mi correo institucional:
juan.villamizar@aerocivil.gov.co

ANEXOS

Poder otorgado al suscrito para actuar en representación de la U.A.E. de Aeronáutica Civil con los soportes.

Las indicadas en el acápite de pruebas.

DERECHO

Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y Leyes 797 de 2003 y 575 de 2012, Ley 1437 de 2011.

Por último, ruego ser reconocido para actuar en los términos del poder conferido ya obrante en el expediente.

Con el debido respeto del señor Juez,

Atentamente.



JUAN MANUEL VILLAMIZAR ORTEGA
C.C No. 19.493.832
T.P No. 69.103 del C. S de la Judicatura



1052-01-003-250-2021
Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2021

Señor

JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI (V)

adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación:	760013333001202100057
Demandante:	RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZÓN
Demandada:	Unidad Administrativa Aeronáutica Civil (UAEAC) Notificaciones_Judiciales@aerocivil.gov.co y juan.villamizar@aerocivil.gov.co
ACTUACION	CONTESTACIÓN DEMANDA

CAMILO ANDRÉS GARCÍA GIL, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 2.231.695 de Ibagué, portador de la tarjeta profesional de abogado 150.068 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en ejercicio de la delegación realizada por el Director General, a través de la Resolución 4282 del 29 de octubre de 2004, en mi condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, conforme a los documentos que se anexan, confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **JUAN MANUEL VILLAMIZAR ORTEGA**, identificado con cédula de ciudadanía **19.493.832**, titular de la tarjeta profesional **69.103** del Consejo Superior de la Judicatura, para que en calidad de mandatario judicial de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, conteste demanda e intervenga en el proceso de la referencia, para que defienda los intereses de la Entidad y presente si hay lugar a ello, las excepciones e incidentes de conformidad a lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y el CGP y demás normas concordantes.

El apoderado cuenta con las facultades propias del mandato, conforme lo señalado en el artículo 77 del Código General del Proceso y, en especial, las de presentar fórmula conciliatoria cuando el Comité de conciliación de la entidad así lo autorice y la de recibir, excluyendo la de sustituir.

En aplicación a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, reglamentada por el Decreto 2364 de 2012, se firma este acto de manera digital, por lo que se solicita se dé aplicación a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 74 del Código General del Proceso y se reconozca personería al abogado **JUAN MANUEL VILLAMIZAR ORTEGA** para los efectos y de conformidad con los términos del presente poder.

Atentamente,

CAMILO

ANDRES

GARCIA GIL

CAMILO ANDRÉS GARCÍA GIL

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Firmado
digitalmente por
CAMILO ANDRES
GARCIA GIL

Fecha: 2021.05.25
14:15:37 -05'00'

Elaboró: Juan Manuel Villamizar Ortega – Abogado OAJ

Revisó: Adolfo León Castillo Arbeláez – Coordinador Grupo Representación Judicial OAJ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.493.832**
VILLAMIZAR ORTEGA

APELLIDOS
JUAN MANUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1962**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-ENE-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00010821-M-0019493832-20080603

0000357489A 1

6210010358

162168

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

69103 Tarjeta No.	94/07/05 Fecha de Expedición	93/10/28 Fecha de Grado	
JUAN MANUEL VILLAMIZAR ORTEGA			
19493832 Cédula	CUNDINAMARCA Consejo Seccional		
CATOLICA Universidad			


Presidente Consejo Superior de la Judicatura



POWER VISION DE COLOMBIA S.A.

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**



Bogotá, 05 de marzo de 2020

**EL COORDINADOR DEL GRUPO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

CERTIFICA

*Que el doctor **CAMILO ANDRES GARCÍA GIL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.231.695 de Ibagué, presta sus servicios a la Entidad desde el día 03 de octubre de 2018.*

Que actualmente desempeña el cargo de Jefe de oficina Aeronáutica Nivel 64, Grado 39, de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Esta certificación se expide para efectos fiscales con el fin de acreditar el cargo que ocupa en la Entidad, para el otorgamiento de poderes en virtud de la Resolución de Delegación No. 4282 del 29 de octubre de 2004.


JOSÉ GABRIEL CUBIDES RIAÑO

Elaboró: Maritza Betancourt Guzmán

República de Colombia

AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

RESOLUCION NUMERO

(#04282)

29 OCT. 2004

"Por la cual se delegan unas funciones"

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

En ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y las contempladas en el Decreto 260 de 2004;

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, preceptúa que los Representantes Legales de los organismos y entidades que posean estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor, vinculados al organismos correspondiente.
2. Que mediante la Resolución No. 01225 del 9 de abril de 2001, el Director General de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL** delegó en el Director Legal la función de otorgar poder a los abogados externos y funcionarios de la Entidad para que la representaran en todas clase de asuntos judiciales y administrativos.
3. Que mediante el Decreto 260 del 28 de enero de 2004, se modificó la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, cambiando la denominación de sus dependencia y oficinas.
4. Que de acuerdo a la nueva estructura de la Entidad, la Oficina Asesora Jurídica, debe cumplir entre otras, la función ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad, en los casos en que así lo disponga el Director General, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, numeral 4 del Decreto citado.
5. Que conforme a lo previsto en el artículo 9 Ibidem y con el fin de optimizar la marcha organizacional de la Entidad, se hace necesario adecuar a la normatividad vigente y conforme a la nueva estructura de la Entidad, las funciones relacionadas con la representación judicial de la Entidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO JEFE DEL GRUPO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACION DE FUNCIONES CONFERIDAS EN EL ART 4 DE LA RESOLUCIÓN 03183 DE 2007, DA FE QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA TOMADA DE SU ORIGINAL X COPIA FOTOCOPIA QUE TUVE A MI VISTA Y REPOSA EN ESTA ENTIDAD

EN: EL GRUPO DE ARCHIVO GENERAL

BOGOTÁ, D.C., 05 DE MARZO DE 2020



URIEL BEDOYA CORREA

COORDINADOR GRUPO DE ARCHIVO GENERAL

AERONAUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCION NUMERO

(#04282)

29 OCT. 2004

Continuación de la Resolución "Por la cual se deroga la Resolución No. 01225 del 9 de abril de 2001 y se delegan unas funciones"

6. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Delegar en la Oficina Asesora Jurídica la representación judicial de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en toda clase de actuaciones judiciales, civiles, penales, laborales, contencioso administrativas, policivas, administrativas y arbitrales, así como en las actuaciones extraprocesales de la misma naturaleza.

Para tal efecto la Oficina Asesora Jurídica cumplirá las siguientes funciones:

1. Notificarse a través del Jefe la Oficina Asesora Jurídica y/o del apoderado que se nombre con tal fin, de todos los asuntos judiciales así como de los requerimientos y actos administrativos proferidos por las diferentes autoridades administrativas y de policía.
2. Promover los procesos ante la Jurisdicción Ordinaria, Contencioso Administrativa, Autoridades Administrativas, de Policía y constituirse en parte civil en los Procesos Penales, en que tenga interés la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
3. Interponer los Recursos Ordinarios y Extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos mencionados.

ARTICULO SEGUNDO: Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil las siguientes funciones:

1. Otorgar poder a los abogados externos contratados para que actúen como apoderados de la Entidad, en toda clase de asuntos

REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO JEFE DEL GRUPO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACION DE FUNCIONES CONFERIDAS EN EL ART 4 DE LA RESOLUCIÓN 03183 DE 2007, DA FE QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA TOMADA DE SU ORIGINAL X COPIA FOTOCOPIA QUE TUVE A MI VISTA Y REPOSA EN ESTA ENTIDAD

EN: EL GRUPO DE ARCHIVO GENERAL

BOGOTÁ, D.C., 05 DE MARZO DE 2020



URIEL BEDOYA CORREA

COORDINADOR GRUPO DE ARCHIVO GENERAL

AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

RESOLUCION NUMERO
(#04232)

23 OCT. 2004

Continuación de la Resolución "Por la cual se deroga la Resolución No. 01225 del 9 de abril de 2001 y se delegan unas funciones"

judiciales y actuaciones o trámites administrativos en que la misma sea parte o deba intervenir.

2. Otorgar poder a los abogados funcionarios de la Entidad, para que actúen como apoderados, en toda clase de asuntos judiciales y actuaciones o trámites administrativos en que la Entidad sea parte o deba intervenir.

3. Suscribir los escritos a través de los cuales se atiendan las acciones de tutela, en que la entidad sea parte. Ante la ausencia del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, esta función será asumida por el Secretario General de la Entidad.

PARÁGRAFO: Los escritos a que hace mención el numeral 3 del presente artículo, serán proyectados por los abogados adscritos al Grupo de Representación Judicial, de conformidad con el reparto que realice el Jefe del Grupo.

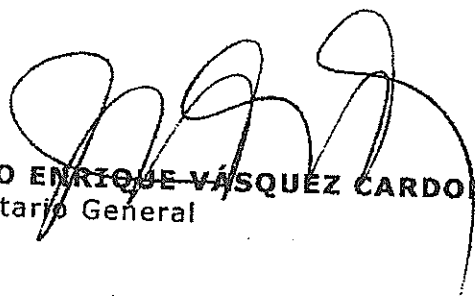
ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su comunicación y deroga en todas sus partes la Resolución No. 01225 del 9 de abril de 2001.

Dada en Bogotá, D.C., a los

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

23 OCT. 2004


JUAN CARLOS VÉLEZ URIBE
Director General


JAIRO ENRIQUE VÁSQUEZ CARDONA
Secretario General

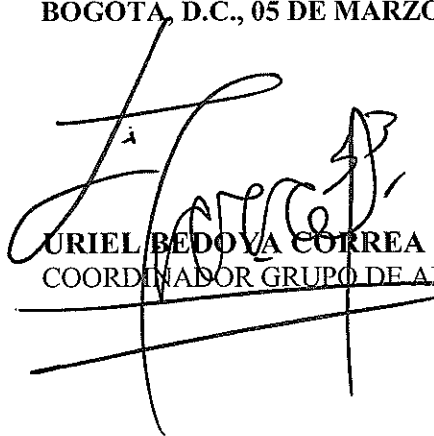

JCDG/CRZ/DFR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO JEFE DEL GRUPO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACION DE FUNCIONES CONFERIDAS EN EL ART 4 DE LA RESOLUCIÓN 03183 DE 2007, DA FE QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA TOMADA DE SU ORIGINAL X COPIA FOTOCOPIA QUE TUVE A MI VISTA Y REPOSA EN ESTA ENTIDAD

EN: EL GRUPO DE ARCHIVO GENERAL

BOGOTÁ, D.C., 05 DE MARZO DE 2020



URIEL BEDOYA CORREA
COORDINADOR GRUPO DE ARCHIVO GENERAL